

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00678-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por ANGIE CAROLINA MORERA BARRAGAN contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-UFPS.

ANTECEDENTES

La señora ANGIE CAROLINA MORERA BARRAGAN inicia acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-UFPS, por considerar que se le están vulnerando el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y acceso a cargos vía concurso de mérito.

HECHOS Y PRETENSIONES

Indica la accionante que participó y terminó las etapas del Concurso Público Convocatoria 436 de 2017 de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, ocupando el lugar número 22 de elegibilidad dentro del empleo identificado en la Oferta Pública de Empleos No.58659 con la denominación Instructor, Código 3010, Grado 1, con derechos adquiridos sobre la consolidación de los resultados de las pruebas efectuados, y sobre las cuales se debieron proveer los cargos en el mismo empleo, empleos equivalentes o de inferior jerarquía.

Refiere la accionante que la CNSC, declaró desierto varios cargos con la denominación Instructor Código 3010 Grado 1, respecto de los cuales se presenta similitud funcional respecto de la oferta de empleo a la cual se postuló dentro de la convocatoria 436, y sobre los cuales se encuentra en la lista de elegibles.

Por lo anterior, en atención a que la lista de elegibles de la que hace parte está próxima a vencerse, solicita la accionante si exija a las entidades accionadas, informen si hay concursantes que no han aceptado el nombramiento, y en el evento de que no se hayan aceptado, continuar con quienes siguen y hacen parte del resto de elegibles en estricto orden de mérito, hasta cubrir las vacantes ofertadas. Esto en razón a que la CNSV, el 22 de septiembre de 2020, cambió el criterio unificado, aprobando el uso con empleos equivalentes, ante lo que manifiesta la accionante que en su caso se pretende aplicar solamente el mismo empleo.

Indica la accionante, que el 03 de febrero de 2020 fue nombrada en provisionalidad al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI para desempeñar el cargo de Experto Código G3 Grado 07 ubicado en la Vicepresidencia Ejecutiva.

Refiere que el 03 de septiembre de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI suscribió con la Comisión Nacional del Servicio Civil el Acuerdo No.0244 mediante el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Agencia Nacional de Infraestructura- Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales No.1420 de 2020.

Sostiene que el 23 de febrero del año en curso, en cumplimiento a los parámetros establecidos en el Acuerdo No.0244, se inscribió con el ID 361215328 para el empleo a nivel asesor, identificado con el código OPEC 143996, denominado Experto Asesor G3-7, con el fin de concursar para la provisión definitiva del cargo que viene desempeñando en la ANI, desde el año 2020.

Manifiesta la accionante que previa verificación de los requisitos mínimos, fue admitida en el concurso por la experiencia acreditada con los certificados aportados que demuestran el tiempo que trabajó en la Agencia Nacional de Infraestructura, Ingencon S.A.S., Consorcio Intercorredor Vial, Panivi S.A.; sin embargo, dentro de la validación de la experiencia no fue tomada en cuenta en su totalidad las certificaciones de la ANI, Ingencon S.A.S., Consorcio Intercorredor Vial y Panivi S.A., porque según el operador *“los documentos en estado sin validar, serán verificados en la prueba de valoración de antecedentes, siempre y cuando el acuerdo del proceso de selección lo indique”*.

Indica la accionante que lo anterior, constituye una vulneración a sus derechos, dado que no le asignaron el puntaje total por la experiencia adquirida con la ANI que en total suman 88.1 meses, Ingecon S.A.S. que suma 5.7 meses, Consocio Orion que suma 6.47 meses, Panivi S.A. que suma 30.4 meses, para un total de experiencia de 130.66 meses, situación que la pone en desventaja respecto de los demás participantes y que vulnera el debido proceso, toda vez que las certificaciones emitidas por la ANI, cumple con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015 y el Anexo Técnico del Acuerdo Rector numeral 3.1.2.2. En consecuencia, su puntaje final se verá seriamente afectado en desmedro de sus derechos.

Refiere la accionante que la ANI solicitó al operador del Concurso- Universidad Francisco de Paula Santander, revisar nuevamente las certificaciones que contenían la expresión “en la actualidad”, a lo que indicó que dicha expresión no era de carácter imperativo y que había realizado la validación de dichas certificaciones, razón por la que no encuentra fundamento alguno para que no le hayan validado sus certificaciones.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia de la Certificación Laboral No.01254 emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, de fecha 16 de septiembre de 2021.

Copia de la Certificación de Contrato emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, de fecha 21 de febrero de 2020.

- Copia de la Certificación Laboral expedida por Panivi S.A. de fecha 25 de noviembre de 2015.

- Copia de la Certificación Laboral expedida por Panivi S.A. de fecha 11 de septiembre de 2014.

- Copia de la Certificación Laboral expedida por Consorcio Intercorredor Vial de fecha 14 de abril de 2015.

- Copia de la Certificación Laboral expedida por Consorcio Orión de fecha 22 de septiembre de 2015.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 01 de octubre de 2021, se ordenó la notificación de las convocadas, para que en término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 04 de octubre de 2021, se notificó a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC y a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC y al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA, brindaron contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC

La entidad accionada refirió: “Consultado el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad-SIMO, se logró constatar que la señora ANGIE CAROLINA MORERA BARRAGAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1032369920, se inscribió con el ID 361215044, para el empleo de nivel Asesor, identificado con el código OPEC No.143996, denominado Experto, Código G3, Grado 7, ofertado en la modalidad Abierto por la Agencia Nacional de Infraestructura en el “Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020”.

(...)

El Anexo Técnico del Acuerdo de Convocatoria, sobre las reclamaciones contra los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos, establece lo siguiente:

3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM

Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por

la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña.

Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso.

Con base en lo anterior, entre el 14 y el 15 de julio de 2021, los aspirantes inscritos en la modalidad Abierto, podían presentar reclamación contra los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos sin embargo, LA ACCIONANTE NO PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE RECLAMACIÓN.

(...)

En ese sentido, resulta válido manifestar que la accionante al no presentar la reclamación pretende desconocer el trámite administrativo pertinente para controvertir su resultado en el proceso de selección, omitiendo su responsabilidad de acatar las disposiciones normativas que rigen el proceso de selección, es decir, olvidó la tutelante que se estableció una fase de reclamaciones contra los resultados de la VRM y optó por la acción judicial que tiene carácter residual para solicitar el amparo de derechos fundamentales que no han sido vulnerados por la CNSC, desconociendo el principio de igualdad que rige los procesos de selección e intentando obtener un amparo judicial que a todas luces resulta improcedente.

(...)

Si bien la accionante acreditó el requisito mínimo de formación, respecto del requisito de experiencia, la accionante señala que la certificación laboral expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura acredita el cumplimiento de dicho requisito.

Para clarificar el escenario, es necesario traer a colación la certificación que alude la accionante, para lo cual se la muestra a continuación:

(...)

De la anterior imagen tenemos que la certificación laboral indica que la accionante fue vinculada a la entidad desde el 3 de febrero de 2020 y que a la fecha de la expedición de la certificación laboral, esto es, al 1º de febrero de 2021, desempeñaba el empleo denominado Experto, Código G3, Grado 7.

Es decir, desde el 3 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, no se tiene certeza del empleo que desempeñó la accionante en la Agencia Nacional de Infraestructura, por ende, no puede validarse la certificación laboral.

En ese sentido, la certificación laboral al establecer el término “actualmente” indica que a la fecha de la expedición de la certificación, la accionante ocupaba el empleo denominado Experto, Código G3, Grado 7, pero no se puede establecer la fecha desde la cual inició el desempeño de dicho empleo, es decir, no se tiene certeza de que durante su vinculación a la Agencia Nacional de Infraestructura, desempeñó el mismo empleo que ejerce “actualmente”.

(...)

En este punto tenemos que, no existe vulneración de ningún derecho fundamental en el caso que expone la accionante, pues la CNSC simplemente está cumpliendo y aplicando lo dispuesto por las normas que rigen el “Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y CAR 2020”, esto es, los Acuerdos de Convocatoria y el Anexo Técnico, donde se establece que las certificaciones laborales deben establecer con precisión la fecha de inicio y determinación del empleo o empleos desempeñados por la aspirante, así como las funciones ejercidas, lo cual evidentemente no se presenta en la certificación expedida por la ANI, la cual es objeto de reproche. En caso de que su señoría disponga desconocer dicha situación, permitiría que los aspirantes impongan su voluntad y establezcan sus propias condiciones para el desarrollo del proceso de selección, abriendo la puerta para que todos los inscritos que no superaron la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos establezcan las pautas o criterios para la verificación de sus documentos, pese a que el operador del proceso de selección ya adelantó la Verificación de Requisitos Mínimos en la modalidad de Abierto y aplicó las pruebas el pasado 12 de septiembre de 2021, es decir, ya está en curso el proceso de selección y acceder a la pretensión de la accionante constituiría un retroceso.”

CONTESTACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

La entidad accionada refirió: “La aspirante Angie Carolina Morena Barragán, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1032369920, se inscribió con el ID 361215044, para el empleo de nivel Asesor, identificado con el código OPEC 143996, denominado Experto, Código G3, Grado 7.

Por motivo de la acción de tutela que motiva el presente informe, la UFPS realizó una nueva verificación de los documentos aportados por la mencionada Tutelante al aplicativo SIMO encontrando lo siguiente:

Los requisitos mínimos dispuestos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) y en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales exigen para el empleo al cual la Tutelante se postuló, lo siguiente:

Estudio: Título profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines, Derecho y Afines, Administración,

Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Afines y título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Experiencia: Cincuenta y siete (57) meses de experiencia profesional relacionada.

Ahora bien, la Tutelante cumplió con los requisitos mínimos exigidos por el empleo ofertado a razón de que el título de Ingeniería Civil expedido por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y aportado al aplicativo SIMO mediante Acta de Grado, se encontraba dentro de las disciplinas académicas exigidas por la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales; acreditando así, el cumplimiento del Requisito Mínimo de EDUCACION exigido para el empleo al cual la accionante se postuló.

(...)

Así las cosas, actualmente esta institución educativa ha desarrollado la etapa de verificación de requisitos mínimos, la cual según el artículo 13 del Acuerdo en cita, tiene la finalidad de:

“VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los correspondientes MEFC,. Trascritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de las inscripciones. Conforme al última "Constancia de Inscripción" generada por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección. sino (sic) una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección.”

Adicionalmente, la experiencia y educación adicional (posterior al cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el respectivo empleo) que señalen las certificaciones, serán objeto de análisis en la prueba de VALORACIÓN DE ANTECEDENTES, como se indica en el anexo mediante el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de las plantas de personal de las entidades que hacen parte de la convocatoria, así:

“4. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES

Esta prueba se aplica con el fin de valorar la Educación y la Experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria (Prueba sobre Competencias Funcionales).”

Por otra parte, y con relación a su solicitud de validar todos los documentos allegados al aplicativo SIMO, la UFPS se permite recalcar que, teniendo en cuenta que si su estado es el de ADMITIDA en la etapa de verificación de requisitos mínimos, dicha etapa tiene por objeto, solamente, verificar si el aspirante cumple o no

con lo exigido por la OPEC para el empleo al que se postuló y señalando si será admitido o no en el presente concurso de méritos, señalando únicamente en el aplicativo con cuales documentos cumple el requisito mínimo y los otros folios serán objeto de estudio en la etapa de valoración de antecedentes, que no se ha publicado, debido que nos encontramos en la calificación de las pruebas escritas y los resultados de VA solo se publican a las personas que superan el puntaje eliminatorio de la prueba escrita funcional.

Por lo tanto, en esta fase del proceso, únicamente, se determina si un concursante cumple o no con el requisito mínimo solicitado en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) y en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para el empleo por el cual concursa, por ello, los otros documentos no son objeto de valoración o de calificación en las siguientes fase.

De todo lo enunciado se puede concluir que, en la presente etapa, se valoró lo concerniente al cumplimiento del requisito mínimo hasta cumplir el mismo y los folios restantes serán evaluados en la etapa correspondiente que es la prueba de Valoración de Antecedentes como fue expuesto anteriormente.

Se tiene entonces que realizada dicha verificación de los documentos allegados por la Señora Angie al aplicativo SIMO, dentro de los tiempos legalmente establecidos para dicho fin, la UFPS encuentra que son válidos para la acreditación del requisito mínimo exigido por el empleo ofertado.

Ahora bien, la accionante pretende que se le indique, que ciertos folios de experiencia, se indique si son válidos o no, de una prueba que no se ha ejecutado y no hay certeza que el tutelante llegue a la misma, debido que no se han publicado los resultados de la prueba escrita eliminatoria, situación totalmente ilógica, pero la UFPS aclara que dichas certificaciones de experiencia, en el caso hipotético que los documento no analizados contengan todos los elementos determinados en la norma que regula el concurso, serán validados sin ningún inconveniente (...)"

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en

los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, la ciudadana ANGIE CAROLINA MORERA BARRAGAN, se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER son las entidades a las que se les aduce vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD

El artículo 13 de la Constitución Nacional refiere el derecho a la igualdad y establece: *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica...”*

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

La jurisprudencia constitucional también ha establecido sobre el Debido Proceso que: *“El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.*

El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite.

En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del particular quede en manos del ente administrativo. Por lo cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el que se aparta de las normas aplicables, para realizar su propia voluntad, implica violación del debido proceso."

Ahora bien, se observa que la Corte ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela respecto al Debido Proceso, cuando se advierte o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos judiciales de defensa.

Problema Jurídico

Corresponde a esta Juzgadora determinar si las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental invocado por la accionante, tales como el derecho a la igualdad, al debido proceso y el acceso a cargos públicos vía mérito.

CASO CONCRETO

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro

medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Sin embargo, la regla general a la cual se ha hecho referencia, presenta excepciones:

a) Cuando el afectado sea un sujeto de especial protección constitucional, como lo son: los niños y las niñas, las personas que sufren alguna discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos, por cuanto su situación de debilidad manifiesta impone el amparo mayor que la Constitución les brinda y, por ende, el estudio de fondo de sus asuntos.

b) Cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implique un agravio a un derecho fundamental como la vida, el mínimo vital o el debido proceso¹.

c) Cuando los medios de defensa con los cuales cuenta el accionante, se tornan ineficaces para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos² o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable³.

En el caso *sub examine*, se tiene frente a los antecedentes de la accionante los siguientes:

Con la presente acción constitucional, pretende la accionante se ordene a las entidades accionadas a “revisar nuevamente la certificación 88.1 meses emitida por la ANI (sic)”, en la medida en que la misma satisface los requisitos exigidos en el concurso de méritos y permite determinar 130.66 meses de experiencia, y en consecuencia se ordene la suspensión del concurso de méritos hasta en tanto se realice una valoración adecuada de los certificados.

Ahora bien, conforme a las contestaciones allegadas por las entidades accionadas, se tiene que efectivamente la accionante se inscribió y fue admitida dentro del proceso de selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales No.1420 de 2020, respecto del empleo de nivel asesor identificado con OPEC 143996, denominado experto asesor G3-7, al haber acreditado los requisitos mínimos de estudio y experiencia.

Por otro lado, los motivos de inconformidad aducidos por la accionante, corresponde a que en el curso de la etapa de verificación de requisitos mínimos, no fueron tenidas en cuenta la totalidad de las certificaciones laborales aportadas, bajo la consideración del operador de que los documentos en estado sin validar, serían verificadas en la prueba de valoración de antecedentes, situación que aduce a una vulneración a los derechos fundamentales invocados.

Conforme a lo indicado por la accionante y las contestaciones de las entidades accionadas, encuentra el Despacho que no hay lugar a acceder al amparo solicitado, en atención a que los reparos de la accionante corresponden a que no fueron tenidas en cuenta la totalidad de certificaciones laborales aportadas dentro de la etapa de

¹ Sentencias T-905 de 2008, T-850 de 2008, T-1083 de 2001 y T-038 de 1997.

² Sentencia T-1268 de 2005.

³ Sentencia T-1083 de 2001.

verificación de requisitos mínimos, por lo que el amparo implorado es improcedente, como quiera que, conforme al Anexo mediante el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, se encuentra establecido en el numeral 3.4 que las reclamaciones contra los resultados de la verificación de requisitos mínimos, deberán ser interpuesto por los aspirantes dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados, situación sobre la cual, la accionante no acreditó haber elevado la correspondiente reclamación a efectos de solicitar a las accionadas que le fueran tenidas en cuenta las certificaciones laborales que no le fueron validadas dentro de la etapa de verificación de requisitos mínimos.

Adicional a lo anterior, no se puede parar por alto que, si bien no fueron tenidas en cuenta la totalidad de las certificaciones laborales aportadas por la aspirante a efectos de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos, la aspirante fue admitida y se le permitió continuar con su participación dentro del proceso de selección y presentar las pruebas escritas dispuestas dentro de la convocatoria, sin que por ello tampoco se avizore una vulneración a los derechos deprecados por la accionante.

Igualmente se advierte, conforme al anexo del proceso de selección y lo manifestado por las accionadas, que una vez superada la etapa de resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución, y en caso de que la accionante supere las pruebas, se procederá con la etapa de valoración de antecedentes, mediante la cual se valorará la educación y experiencia adicional a los requisitos mínimos acreditados por la accionante, y dentro de la cual deberán ser objeto de estudio y valoración las certificaciones laborales aportadas y que no fueron tenidas en cuenta para la verificación de requisitos mínimos, debiendo entonces en esta etapa, proceder la accionante a presentar las correspondientes reclamaciones en caso de que las certificaciones laborales no sean validadas, toda vez que para el Despacho, dentro de las etapas que se han surtido a la fecha dentro del proceso de selección, no se avizora una vulneración a los derechos invocados por la accionante.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien es procedente la Acción de Tutela ante la presunta vulneración al derecho a la igualdad o debido proceso invocados por la accionante, no se puede pasar por alto que la misma es un instrumento de protección excepcional, cuando se advierte que no existen otros mecanismos de defensa judicial, o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos judiciales de defensa.

Es así como, jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha indicado que la acción de Tutela no tiene como fin llevar procesos sustitutivos de los mecanismos judiciales ordinarios y en consecuencia, es deber de los ciudadanos acudir principalmente a dichos mecanismos previstos para ventilar y solucionar las controversias que surgen cuando consideran que sus garantías fundamentales están siendo afectadas, lo anterior porque, según lo ha expuesto la Corte Constitucional: “ (...) el desconocimiento de lo anterior conllevaría que la acción de tutela se convirtiera en un mecanismo paralelo de protección, que implicaría que el juez constitucional resolviera toda controversia que en principio sería competencia de los jueces ordinarios y, a su vez, se desnaturalizarían no solo la tutela en sí, sino también las funciones que la Constitución

le otorgó a la administración de justicia. Así las cosas, se ha afirmado que, en principio, al existir otros mecanismos de defensa judicial, la acción constitucional no es el medio al cual se debe acudir para la protección de derechos fundamentales.” (Sentencia SU-298/15).

Así mismo, ha indicado la Corte que, a pesar de la existencia de otro medio ordinario de defensa, la tutela procede cuando sea utilizada como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable de manera injustificada, estableciendo unos requisitos para que se presente el perjuicio irremediable en los siguientes términos:

“A) El perjuicio ha de ser inminente: 'que amenaza o está por suceder prontamente'. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.

C) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes.

D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.” (Sentencia T-253 del 27 de mayo de 1994)

Por lo anterior, encuentra el Despacho, a la luz de lo indicado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, que la acción de tutela instaurada es improcedente para acceder al amparo constitucional que solicita la accionante, pues es de resaltarse que la accionante tuvo a su disposición mecanismos de defensa administrativos ante los resultados de la verificación de requisitos mínimos, sin que se hubiera acreditado en el escrito de tutela que hubiera interpuesto la correspondiente reclamación dentro del término otorgado para ello.

Así mismo, destaca el Despacho que es improcedente el amparo solicitado, teniendo en cuenta que la accionante no demuestra dentro de la presente acción constitucional, que se le esté ocasionando un perjuicio irremediable.

Sobre lo anterior, para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátese de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.

De lo anterior en el caso objeto de análisis, es claro no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, al igual que no hay ningún derecho fundamental que se le esté vulnerando al accionante por parte de las entidades accionadas, pues como se explicó en precedencia, pese a que no fueron validadas la totalidad de las certificaciones laborales aportadas, no por ello fue inadmitida, por el contrario, se le permitió continuar dentro del proceso de selección y presentar las pruebas escritas, en consecuencia, en caso de superar la etapa de pruebas escritas, deberá la accionante dentro de la etapa de valoración de antecedentes, interponer las reclamaciones a que hubiera lugar, en caso de que las certificaciones laborales expedidas por la Agencia Nacional de

Infraestructura, Ingencon S.A.S., Consorcio Intercorredor Vial y Panivi S.A., no le fueran tenidas en cuenta, pues solo en ese momento se podría configurar la vulneración a los derechos sobre los cuales solicita el amparo la accionante.

En este orden de ideas, el Despacho considera que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho a la igualdad o debido proceso, por lo que, con fundamento en lo expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora **ANGIE CAROLINA MORERA BARRAGAN** por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**226ca0a95549a67da4872fc967c425bd4a3b14908084f27c094077a130720a6
a**

Documento generado en 15/10/2021 08:04:27 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>